
EL LIBERALISMO Y LA DEMOCRACIA

Hebert Gatto¹

Describe las complejas interacciones entre el liberalismo y la democracia que concluyó con la emergencia de una forma de gobierno conocida como la democracia liberal.

El proceso de transformaciones que abrió paso a la modernidad encontró un importante cauce de expresión política en el liberalismo, la corriente ideológica que a partir del siglo XVII inspiró y a su vez se nutrió dialécticamente de las revoluciones inglesa, americana y francesa. Por más que estas revoluciones tuvieran tradiciones justificantes, propias, como las tenía el liberalismo que tanto las influyó con una prehistoria de reivindicaciones de derechos en diversos ámbitos que pueden rastrearse desde la antigüedad y el medioevo (estoicos, Cicerón, padres de la Iglesia, ciudades italianas de la baja edad media, Suárez, Grocio, escuela flamenca del derecho natural, escuela de Salamanca). Aún cuando será inmersa en la dinámica de la cultura de la modernidad, que esta diversificada y compleja tradición política, al sentar las bases para su consolidación, encontrará su expresión definitiva. Nos referimos al siglo XVII y al formidable impulso de John Locke, la figura que más aportó para sentar las bases del liberalismo y a partir de él del desarrollo de los derechos humanos y de las instituciones y principios que los sustentaron.

En el siglo XVI, a partir de la expansión comercial europea y los descubrimientos, se iniciará la transformación económica en el norte de Europa comenzada en varias ciudades de los países bajos recién liberadas del imperio español y con ella los primeros atisbos del capitalismo comercial. Concomitantemente, en un proceso no lineal y con antecedentes puntuales en varias zonas del continente, surgirán con diferentes tiempos de desarrollo: la burguesía nueva clase social ansiosa de liberarse de trabas políticas y económicas del pasado, los estados nacionales, el humanismo con su revolución de las mentalidades y el individualismo, desplazando lentamente, pese a la oposición del catolicismo, el eje intelectual de la época de lo colectivo a lo individual.

Junto a ellos, en medio de las guerras de religión y la incipiente secularización, despuntará el racionalismo, con su idea de un sujeto moral autónomo –una consecuencia del individualismo religioso aportado por la Reforma–, la valorización de la ciencia, desplazando gradualmente a la fe, el lugar cada vez más preeminente de la libertad personal y una diferente estimativa del Derecho, paulatinamente liberado de sus ataduras eclesiales, todo lo cual confluirá en una nueva y más rica mentalidad que encontrará en el liberalismo y su espíritu libertario un cauce de expresión y fundamentación. Aún cuando, deba reiterarse,

¹ Hebert Gatto Fernández, Montevideo 1939, es abogado, ex profesor de ciencias políticas de la Universidad de la República, actual Profesor del Centro de Altos Estudios Nacionales en su especialidad de Teoría Política, periodista, actualmente columnista del Diario El país, autor de innumerables artículos y de dos libros, “El cielo por Asalto” Taurus, Montevideo, 2004 y (con Yvette Trochon) Presidencialismo y Parlamentarismo en el Uruguay, F.C.U, Montevideo, 1993. hgatto@adinet.com.uy
Fecha de presentación del artículo: agosto de 2012.

no haya sido únicamente el liberalismo el creador de este sentimiento de época que en su expresión más abstracta y general constituye la modernidad, sino que éste fue la corriente política que mejor pudo aprovechar de las circunstancias para adaptarlas a sus cometidos. Lo que también puede expresarse diciendo que el liberalismo fue quien mejor plasmó la dimensión política de la cultura de la modernidad

Sostiene Gregorio Peces Barba, el gran teórico español de los derechos humanos, que tres acontecimientos sintetizaron o emblematizaron los complejos procesos recién descritos. Primero los debates suscitados por las prolongadas guerras de religión que acompañaron la aparición del protestantismo en el siglo XVI y que culminaron con la aceptación de la idea de tolerancia –la admisión de las ideas ajenas, religiosas primero y generales más tarde– que cerró este largo ciclo de terrible saldo en vidas humanas. En segundo lugar las fundamentales reflexiones sobre los límites del poder regio, primero en Inglaterra con la “Gloriosa Revolución” del siglo XVII, y su reivindicación del parlamento que luego alcanzaron y se desarrollaron con enorme fuerza en las colonias británicas. En tercer lugar el análisis de las condiciones de la obediencia política ciudadana en las primeras formulaciones de derechos de la revolución americana –rescatando la olvidada idea medioeval del consentimiento como fundamento de la obediencia política.

Más avanzado el proceso, pero siempre en la misma dirección, la revolución francesa proclamó la universalización de los derechos del hombre, extendiéndolos, mediante las sucesivas declaraciones del pueblo, a todos los seres humanos sin distinción. Sin olvidar los aportes más genéricos, pero para nada desdeñables, sedimentados por el humanismo renacentista en todos los ámbitos de la cultura, especialmente en aspectos como el derecho penal y procesal de las monarquías, mediante el rescate de la dignidad de los acusados o de los sometidos a proceso. En lo que constituyó un lento proceso de reconocimiento de los derechos mediante sucesivos aportes, algunos, bastante separados en el tiempo, pero que en definitiva terminaron apoyándose mutuamente.

Este conjunto de acontecimientos, aupados por las burguesías y el flamante estrato de los “intelectuales”, terminarán por coincidir en el cuestionamiento del poder regio minando las bases del absolutismo y de las morales heterónomas sustentadas en la autoridad de Dios o del monarca, para relanzar sobre nuevos fundamentos, al moderno contractualismo en sus diversas dimensiones (el poder político se basa en un contrato por el cual los ciudadanos aceptan darse un gobierno y obedecerlo, a cambio del respeto de sus derechos en un clima de paz y seguridad), el parlamentarismo (órgano, de remotos orígenes medioevales, constituido por representantes de ciertos estratos ciudadanos, electos por ellos mismos que progresivamente reclama más y más competencias), la separación de poderes, como control recíproco de los diversos poderes, incluyendo un poder judicial independiente y fundamentalmente, los derechos humanos de primera generación, (derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad), como objeto límite y fin de todo gobierno. A los que progresivamente, pese a las luchas épicas que supuso afirmarlos, seguirán los derechos políticos, la soberanía popular y las garantías ciudadanas frente al gobierno.

Todo este colosal esfuerzo de sistematización y fundamentación de principios, será perfeccionado y coronado por el constitucionalismo (un documento solemne de reafirmación nacional donde se plasmarán las grandes líneas del contrato social y político y los derechos

fundamentales de los ciudadanos). En un largo proceso liderado por los grandes nombres del pensamiento pre liberal y liberal, desde Hugo Grocio (1583-1645), Tomás Hobbes (1588-1679), Baruch Spinoza (1632-1677), Samuel Pufendorf (1632-1694), John Locke (1632-1704), Charles Montesquieu (1689-1755), Francois-Marie Voltaire (1694-1778), Emmanuel Kant (1724-1804), César Beccaria (1738-1794), Marie Jean Condorcet (1743-1794), Wilhelm von Humboldt (1767-1835), J. S. Mill (1806-1873) entre otros, hasta los liberales contemporáneos regidos por la figura tutelar del recientemente fallecido John Rawls, además de Isaiah Berlin, Ronald Dworkin, H.L.A. Hart y una pléyade de filósofos políticos que en los últimos decenios han revolucionado y remozado la filosofía política y la ética pública.

Los primeros derechos humanos reconocidos, junto a la profundización de las bases morales de su fundamentación emergerán de este humus históricamente condicionado, a través de lo que más tardíamente se denominó el “liberalismo clásico”, el mismo que en sus grandes líneas más tarde se plasmó institucionalmente en la democracia liberal, en respuesta a las necesidades de los europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Por más que muchas de estas respuestas que en su conjunto conforman el liberalismo existieran, por lo menos en formación, desde bastante antes que esta corriente recibiera ese nombre, algo que recién ocurrirá en la primera década del siglo XIX, e incluso previamente a la aparición del liberalismo como escuela o movimiento en la Inglaterra del Siglo XVII. En sus comienzos se postuló, de acuerdo a la tradición del viejo derecho natural que estos derechos eran innatos y se vinculaban con características que definen a la especie humana, con lo que se las asociaba ya por ser otorgada por la divinidad ya a través de una invariante supra histórica: la dignidad del individuo. Entendiendo por tal su autonomía y racionalidad, como rasgos de su ser y no de su poseer.

Es evidente por otra parte, que no era suficiente con que estos derechos aparecieran en la conciencia de las élites y ganaran espacio –más como una aspiración intuitiva que como un pensamiento articulado–, en las capas populares de la población, comenzando por la burguesía en ascenso, mucho más iletrada de lo que generalmente se piensa; resultaba necesario para consolidarlos que se transformaran en derecho positivo, en constituciones y leyes que aseguraran su cumplimiento mediante el poder coactivo del estado cumpliéndose el proceso que hace que a la corta o a la larga, las necesidades sociales genuinas, expresadas como opinión pública demandante, culminen en su reconocimiento jurídico. El análisis histórico confirma esta reflexión reflejando la unidad entre las circunstancias socio culturales que consagran la modernidad, los derechos fundamentales y el liberalismo como su rostro político.

No alcanza por eso, tal como se hace usualmente, con mencionar de forma genérica al liberalismo como si con ello refiriéramos a un fenómeno doctrinario con contenidos claros y distintos. Menos inferir que el liberalismo, burguesía mediante, es el partero de la democracia. Como es sabido, bajo esta denominación cabe agrupar corrientes muy diferentes de aparición temporalmente variada, que precisamente por ello, por su imprecisa heterogeneidad, impiden una caracterización coherente y compartida del fenómeno liberal. Aclarando que a efectos de estas reflexiones, consideraremos como liberales aquellos movimientos, escuelas y autores que contribuyeron a la conformación de la democracia liberal. Es decir a la síntesis institucional del liberalismo clásico con la tradición democrática, que se conformó desde la segunda mitad del Siglo XVIII.

Es evidente por tanto, que la nuestra constituye una decisión estipulativa, que al limitar el liberalismo a su versión puramente política filosófica, aquella coherente con la democracia excluye del mismo a varias corrientes que suelen incluirse en su cauce, fundamentalmente al liberalismo económico. La decisión no es arbitraria, si no genéticamente justificable y conceptualmente pertinente, en la medida que se trata de dos corpus dentro del liberalismo, perfectamente separables, aún cuando usualmente aparezcan confundidos por los comentaristas de este movimiento.

Por su lado el sintagma “democracia liberal”, denomina una forma de gobierno empírica, una síntesis institucional que ha adquirido relevancia y estabilidad y que permite visualizarla como una realidad autónoma, que si bien incorpora tradiciones ya existentes, las trasciende en una combinación que va más allá de sus componentes aisladamente considerados. Democracia-liberal aparece de ese modo como una apelación indisoluble que complementa, a través de una serie de mecanismos, derechos e instituciones, al estado constitucional, al estado de derecho, al estado social y al reconocimiento de los derechos humanos como centro constitutivo de la sociedad política contemporánea. Esta centralidad de los derechos es un aporte del liberalismo, pero no de todos los liberalismos así denominados, sino únicamente de alguno de ellos. Aquellos que Merquior (Liberalismo Viejo y Nuevo. F.C.E. 1993) ha denominado “*liberalismos de los derechos... expresados por el ‘liberalismo clásico’*”. No porque éste ya contenga todos los rasgos institucionales de la actual democracia liberal, sino porque muchos de ellos aparecen en esta y se muestran compatibles con sus posteriores desarrollos.

Como decíamos esta forma de caracterización del liberalismo, definido a través de su logro históricamente más importante, la democracia liberal, permite depurar el concepto excluyendo del mismo aquellos liberalismos que no contribuyeron directamente a su conformación y por ende no están necesariamente implicados en su posterior síntesis con la democracia. Me refiero al “liberalismo utilitarista”, que no acepta la existencia de los derechos humanos a los que el fundador de la escuela Jeremy Bentham calificó de “absurdos con zancos” y que se caracteriza por fusionar la moral con la utilidad social de cualquier práctica humana en un sentido hedonista, evaluando el placer o la satisfacción social que ella produce, para de allí deducir su mérito. Razón por la cual la máxima de moralidad de una acción radica en la contribución de ésta a la felicidad del colectivo y no al cumplimiento de los derechos de sus componentes. Excluye también al denominado liberalismo espiritualista en la senda de Hegel y sus continuadores, entre otros la escuela inglesa de Thomas Green y Leonard Hobhouse, que siguiendo a su inspirador, identifican la libertad con libertad del estado, al que, en definitiva, jerarquizan por encima del individuo. A la vez que rechaza aquellos liberalismos fusionados de distintos modos con el nacionalismo que también jerarquizan a la nación, como un concepto orgánico que hace prevalecer sobre el individuo.

Mayores dificultades plantea la exclusión del liberalismo económico adoptado en primera instancia por la escuela de Manchester y por Adam Smith y sus seguidores escoceses. ¿Representa esta corriente liberista, antidirigista o de libre mercado extremo, un tríptico inseparable del liberalismo de los derechos de Locke y del constitucionalismo de Montesquieu? Michelangelo Bovero plantea el tema con aguda profundidad, existen cuatro núcleos –sostiene– que suelen identificarse con el liberalismo (todos o algunos de ellos): “*El primer núcleo está constituido ... por una completa libertad individual para perseguir, sin*

interferencias públicas, sus propios objetivos privados en el mercado....El segundo núcleo está centrado sobre los derechos fundamentales de libertad personal, de naturaleza no (propriadamente económica) ... y se identifican con la expresión (derechos civiles). El tercero está constituido por los derechos de autonomía democrática... El cuarto gira alrededor de los derechos sociales...” (Una gramática de la democracia, Trotta, 2002).

¿Pueden reunirse los cuatro, realizar su síntesis sin generar compuestos inestables, para caracterizar adecuadamente al liberalismo? O, como piensa Bovero, ¿puede excluirse alguno sin desmerecer el concepto y por el contrario, respetar su génesis y su lógica histórica? Es interesante observar que lo que está aquí en cuestión, para su exclusión o inclusión, no es el mercado como mecanismo de armonización de oferta y demanda y por ende de asignación de precios o incluso el capitalismo como modo de producción, sino que el tema pasa por determinar si el liberalismo como tal, requiere incluir una economía sin regulaciones inserta en un estado mínimo, a lo Hayek o a lo Nozick. Un tema que a su vez se subdivide en una temática conceptual, de congruencia lógica y otro histórico, originado en lo que realmente sucedió en su desarrollo fáctico.

La respuesta es que si excluimos al liberismo (o sea al liberalismo económico en su versión más extrema), la democracia liberal, en todas sus variantes ha sido empíricamente realizable y sin sufrir ningún menoscabo. Así lo acredita la historia y el presente de decenas de países que han adoptado distintas variedades de social democracia sin por ello renunciar al liberalismo político. Alcanza con observar que democracia, más liberalismo político, más derechos sociales, constituye actualmente una fórmula corriente en la inmensa mayoría de las naciones actuales. No con ello solucionamos en el plano puramente lógico la pregunta planteada. Hayek, por ejemplo, lo niega puesto que para él el liberalismo supone el estado mínimo dado que *“no existen principios generales de justicia distributiva reconocidos universalmente, ni es posible deducirlos, y, por el otro, aunque fuera posible alcanzar un acuerdo en relación con principios de ese género, éstos no podrían tener aplicación en una sociedad en la cual los individuos no fueran libres para emplear sus conocimientos y capacidad para la consecución de fines privados”*. De lo que se deduce que sin libertad irrestricta de mercado no existirían verdaderas libertades, lo que, de ser correcto significaría que el liberalismo resultaría incompatible con el dirigismo económico y el estado intervencionista. En el mismo sentido Adam Smith sostuvo que la conducta meritoria de los ciudadanos, pasa por el comercio y la industria y no por la política y la guerra. Verdadero representante de la ilustración unió al liberalismo con el progreso y a éste lo concibió a través de la libertad de mercado y el liberismo (estado sin restricciones económicas). Tanto en la “Teoría de los sentimientos morales”, como en “La Riqueza de las naciones” argumentó que la “mano invisible” del mercado movida por el autointerés material de productores y consumidores, tanto maximizan la riqueza social como la distribuyen equitativamente. Aunque lo mismo no pueda decirse de John Locke, el gran teórico del primer liberalismo, que si bien insistió en el básico derecho de la propiedad privada, entendió por él el derecho al propio cuerpo y a lo producido con el mismo –un extremo que a él al igual que a Carlos Marx le parecía esencial–, más que a la propiedad jurídica de los medios de producción abstractamente considerada.

Pero lo cierto es que, incluso en el plano puramente teórico, el liberalismo de los derechos y el económico no sólo son separables, sino que incluso pueden considerarse

contradictorios. Son diferentes conceptualmente ya que no existe relación genética entre ellos –nos referimos a vínculos causalmente necesarios– y son históricamente disímiles, tanto en su aparición como en su función. No es exacto que la lucha contra las restricciones económicas heredadas del feudalismo implique la aparición de los derechos humanos, ni que el desarrollo científico requiera al estado mínimo, como se insiste. Lo notorio es que el liberalismo político obedeció primordialmente a motivaciones sociales e intelectuales así como a la fuerza de tradiciones pugnant, mientras el económico, posterior en el tiempo, pudo haber estado más influido por intereses materiales. Todo dependiendo del contexto en toda su amplitud.

No son estos argumentos, los manejados por los primeros economistas seguidores del “laissez faire”, los únicos alegados para sostener, como hace Hayek o Nozick y una pléyade de seguidores, erróneamente denominados actualmente “neoliberales” –que nada tienen de “neo” y poco de liberales–, que el liberismo y el liberalismo constituyen una misma e inseparable corriente. Tal como hace el denominado “materialismo histórico”, obligado por sus premisas a descubrir intereses económicos en la génesis y consolidación de todas las instituciones humanas, desde las armas hasta los dioses o las formas de gobierno.

A su vez es difícil desconocer que el funcionamiento absolutamente libre del mercado, sin ninguna regulación, genera externalidades y desigualdades notorias que exigen corrección, particularmente cuando se acepta, como parece de rigor, que los presupuestos de hecho de la democracia contemporánea requieren una sociedad donde todos puedan ejercer sus derechos públicos y privados en condiciones equitativas. Es asimismo conocido, que aún si consideramos exclusivamente el campo de los derechos civiles, sus diferentes componentes chocan en su aplicación, como frecuentemente ocurre entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad o entre la libertad y la igualdad. Conflictos entre los diferentes derechos que no siempre tienen una solución sencilla y predeterminada.

En cualquier caso, lo que es indiscutido es que la democracia liberal en su versión primera debió admitir en el lapso de los últimos dos siglos, la ampliación del elenco de derechos agregando los denominados sociales y culturales, o derechos de segunda y tercera generación. Lo que apareció como una exigencia expansiva destinada a mejor tutelar la totalidad de los derechos. Esta ampliación de su número supuso inevitablemente fortificar el intervencionismo estatal, lo que, como hemos visto, genera tensiones con las limitaciones institucionales y el control de competencias que el liberalismo clásico ha sostenido como requeridos para debilitar y controlar el dominio del estado sobre el ciudadano. Paradojalmente la propia ampliación de los derechos humanos –incluyendo los ambientales– presupone un estado fuerte que aminora las garantías del ciudadano frente a él.

En síntesis la exclusión del liberismo o del liberalismo económico clásico de la denotación del liberalismo, es una operación perfectamente legítima y requerida por la defensa del conjunto de los restantes derechos. La mayoría de los mismos no son de aplicación en una sociedad sin estado o con un estado omiso, donde el mercado y la competencia dictan sus reglas libremente, sin ninguna limitación colectiva. El estado juez y gendarme, no solamente no existió nunca, sino que no podría hacerlo. La vida en sociedad, vital para el homo sapiens, presupone el poder político y éste la regulación y armonización de los derechos de los integrantes de la comunidad, para hacer posible su disfrute y goce.

Liberalismo y liberismo como integrantes de un mismo régimen, suponen un oxímoron, una imposibilidad lógica en sus propios términos. Lo que en absoluto significa que el liberalismo deba desconocer el mercado, la libertad ciudadana para elegir su vida económica y la competencia.

Por más que el liberalismo no fuera la única doctrina que pugnaba por su reconocimiento político y por constituirse en estructura de gobierno. Junto a él, callada durante siglos, denostada pero no muerta, subsistía, viva en las profundidades de la historia, la concepción democrática. La misma que, desde la Grecia clásica al republicanismo renacentista, o a la rebeldía de los diggers o de los levellers en la revolución inglesa, argumentaba que la única forma de libertad es aquella donde los ciudadanos, mediante su intervención personal en el gobierno deciden las obligaciones y derechos que regirán su convivencia, a través, como diría Rousseau, de la voluntad general. Una expresión que en la teoría era más que la voluntad de todos, en tanto simboliza la expresión racional de la comunidad como única fuente de soberanía. La libertad, potestad igualitaria, indelegable y activa, se ejerce participando en la asamblea. El ciudadano solo es libre en tanto, ejerce sus prerrogativas cívicas y, como natural contrapartida, acepta la obligatoriedad de las decisiones comunes al abrigo del orden político así conformado, pero careciendo de cualquier ámbito significativo de privacidad del mismo rango del público.

Cuando este legado es retomado en Europa y en las colonias inglesas, el mismo es utilizado para contraponerlo a la monarquía, donde el gobierno aparecía monopolizado por uno. Aún cuando, en los inicios de los procesos revolucionarios, el gobierno democrático continuaba teniendo mala prensa, en tanto forma corrupta del gobierno del pueblo, como la había calificado Aristóteles, preocupado por las formas “prudentes” de gobernar. Debido a ello los revolucionarios modernos acudían a la figura de la República, en su versión medioeval, como gobierno de todos a través de representantes, tal como característicamente hicieron Madison, Jay, Jefferson en la revolución norteamericana o los enciclopedistas en la Francia prerrevolucionaria.

Uno de los primeros en reutilizar la palabra democracia, fue Robespierre ya al fin de su dictadura, en un célebre discurso en la Convención de 1794. En cualquier caso la expresión continuó mal mirada hasta mediados del siglo XIX, cuando la rescata Tocqueville. Por ello bien puede sostenerse que la democracia desapareció durante dos mil años del lenguaje político, siendo reinventada recién cuando el liberalismo, a menudo a su pesar, terminó por legitimarla.

En la óptica democrática la soberanía, el poder último de decisión, descansa en el pueblo y éste la ejerce directamente, como en la versión clásica griega, o indirectamente a través de representantes, en su formulación moderna. Por más que suele olvidarse que la introducción de la representación importaba un cambio radical respecto a la forma clásica, donde la asamblea popular, a la que podían asistir todos los ciudadanos (varones, nacidos en la polis de familias ciudadanas), tenía un lugar central en el gobierno. De todos modos incluso en su nueva expresión representativa, la democracia era esencialmente la forma de gobierno de los ciudadanos de la polis centrado casi exclusivamente en la vida pública y las condiciones atinentes a la misma.

Fustel de Coulanges, en su conocida obra “La ciudad griega”, refiriéndose a la vida de sus componentes en ella expresó “... uno de los más extraños errores que puede cometerse es creer que en las ciudades antiguas los hombres gozaban de libertad, cuando lo cierto es que no tenían ni la más remota idea de la misma... Tener derechos políticos, nombrar magistrados, poder ser designado arconte –a eso se llamaba libertad–, pero no por ello los hombres eran menos esclavos del estado”. La libertad, era por consiguiente puramente política, participar como “polites” o ciudadanos en las decisiones públicas. Sin olvidar que los ciudadanos quedaban sujetos al ostracismo, votado por la Asamblea sin expresión de causa, ante el mero temor del excesivo poder o renombre de cualquier figura pública. O incluso a sanciones más graves, por atentar contra los dioses de la ciudad, como ocurrió con Sócrates, que por cierto no era un demócrata, pero que supo alzar sus razones contra la tradición.

No ocurre lo mismo con el liberalismo. Como decíamos, su esencial novedad –y su originalidad en la historia del pensamiento político– es que considera el poder desde la óptica de los derechos de los ciudadanos y no desde el estado y sus requerimientos. Eso lo coloca mucho más allá del mero examen de las formas de gobierno. En definitiva ¿por qué, cuál es la razón, se pregunta el liberal, por la que debo obedecer a las autoridades?, a lo que contesta, únicamente estoy obligado si presté consentimiento y exclusivamente en los límites y en las condiciones de esa conformidad. El contrato social, que establece que el estado se establece primordialmente para tutelar los derechos humanos de los gobernados, será para el liberal el artificio que legitima, que da razón, de esa aceptación.

Como consecuencia, ambas tradiciones, obedientes a lógicas disímiles –individualista una, colectivista la otra, desde el poder una, mirando al hombre la otra–, presentaban carencias también diferentes. La primera, la democracia antigua o radical, inaplicable a los grandes estados modernos, no asumía que el pronunciamiento ciudadano, aún siendo del pueblo, requería de límites a sus eventuales desbordes, so pena de convertirse en dictadura de la voluntad general; por su lado el primer liberalismo no sólo reducía en la práctica sus beneficios a estratos minoritarios (varones blancos con ingresos) sino que se atenía, prioritariamente a limitar al poder público, sin destacar la importancia del ejercicio de la participación política activa, ni destacar el necesario rol del estado en la positivización y defensa de los derechos humanos progresivamente ampliados en su elenco.

El demorado pero inevitable encuentro de ambas tradiciones, hasta hoy conflictivo y difícil, despuntó con énfasis en los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y Estados Unidos y en el XIX en Francia. En los dos primeros casos, con énfasis en la tutela del ciudadano frente al poder público, en la francesa, más centrada en los aspectos participativos y por ende propiamente democráticos, consagrando al cabo la conflictiva síntesis que hoy se conoce como “democracia liberal”. Como dirá Benjamín Constant, uno de sus primeros publicistas, destacando las diferencias entre la libertad antigua y la moderna: “cuanto más tiempo y más energía consagraba el hombre al ejercicio de sus derechos políticos, más libre se creía. En la clase de libertad que nos corresponde a nosotros, (estado liberal) ésta nos resultara más preciosa cuanto más libre para asuntos privados nos deje el ejercicio de nuestros derechos políticos”. La simbiosis, precariamente lograda, supuso, por un lado, mayor participación de los ciudadanos en los asuntos comunes –no ya directamente, cosa imposible en el estado

de masas, sino a través de representantes-, por otro, la sanción de los primeros derechos humanos concebidos como vallas infranqueables al poder político.

En su compleja práctica histórica posterior ambas dimensiones –democratismo y libertades o derechos– tendieron cada vez más a su expansión: lo democrático participativo, ensanchando el área de inclusión de la participación ciudadana en la vida pública (mujeres, pueblo llano, minorías étnicas, analfabetos), la liberal ingresando y constitucionalizando derechos cada vez más variados (civiles, políticos, sociales, culturales, ambientales, etc.). Pero es obvio que ambos aspectos, conservaron siempre ciertas contradicciones genéticas: así los derechos, pensados originariamente como inmunidades frente al estado, zonas en que éste no debía penetrar, requirieron paradójicamente la asistencia de ese mismo estado para su implementación, aplicación y cumplimiento.

Como es sabido la presencia, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, de corrientes de origen social y sindical, emanadas de la creciente gravitación de la clase obrera, se sumaron paulatinamente al proceso de afianzamiento de la democracia liberal inicialmente abierto por la modernidad. Estos estratos, prolongando demandas anticipadas por las corrientes jacobinas, exigieron derechos socioeconómicos igualitarios que permitieran a las mayorías populares disponer de condiciones de vida adecuadas para ejercer y gozar el elenco de derechos y libertades constitucionalmente otorgadas. Ya sea participando políticamente (dimensión democrática), como disponiendo con más plenitud de su vida privada (costado liberal), en parecidas condiciones materiales y espirituales que la burguesía (justicia social).

Por su lado las corrientes socialistas más radicales, inspiradas en la obra de Carlos Marx, si bien rechazaron la democracia liberal, a la que tachaban de burguesa, en la práctica, que no siempre coincide con el designio de sus protagonistas, contribuyeron a la expansión de los derechos de la clase trabajadora pese a mantener enhiestos sus principios revolucionarios y su inicial desprecio por la democracia liberal y los derechos humanos en tanto mera palabrería jurídica.

El siglo XX fue un siglo de crueles desafíos para el estado-liberal, al reto del estado soviético se sumó la terrible amenaza del fascismo, decidido a terminar con un estado al que consideraba culpable de la decadencia biológica de la civilización occidental en su conjunto. Nada más antitético que la universalidad de los derechos humanos frente al crudo particularismo de la raza, la sangre y el suelo, con el que los fascistas pretendieron edificar una nueva humanidad. El hombre nuevo soviético y el superhombre nacional-socialista, ambos con diferentes motivaciones y programas, pero hermanados en primera instancia por el totalitarismo que los distinguía, abjuraron del pretendido homo liberal, individualista, racionalista, discursivo, argumentativo, egoísta, escudado en sus derechos, y en definitiva, para ellos, carente de solidaridad. Su objetivo confeso fue destruirlo, uno para instaurar la verdad de la raza, el otro para instaurar la verdad de la clase. En los dos casos rechazando expresamente de los derechos humanos para consagrar con diferentes motivaciones el estado totalitario antiliberal como modo de vida social y político.

Vencidos ambos, las amenazas a la democracia liberal siguen vigentes. Esta continúa cargando en gran parte del mundo (justa o injustamente), con la responsabilidad por la desigualdad, la pobreza, la marginación y la exclusión de sectores cuantitativamente

variados de su población, que en el caso de los países subdesarrollados varía de una cuarta parte a más de la mitad de ella. Frente a un pequeño grupo de países que han conseguido una integración social aceptable, la democracia liberal como fórmula política y modo de convivencia sigue prometiendo lo que no logra. En algunos casos incluso retrocediendo en el plano de la justicia social, donde la marginación gana terreno. Ello impone reformarla, otorgarle transparencia, equidad y cercanía con la ciudadanía. En suma honrar los derechos humanos ya suficientemente reconocidos en las declaraciones nacionales e internacionales e iniciar el proceso de cumplimiento efectivo de los mismos, que para eso y sólo para eso existe el estado.

Pero esto no lleva a pensar que, como escribió John Rawls, que la libertad como autonomía de hombres y mujeres, pueda ser superada en aras de la integración o de la equidad. Con demasiada frecuencia se olvida que sin el liberalismo (una palabra que inexplicablemente sigue conservando mala prensa), sin el estado liberal de derecho, no habría derechos humanos, ni garantías de su cumplimiento, ni defensas frente a la opresión y el despotismo del estado. De poco serviría un mundo integrado, sin diferencias sociales, donde todos sean igualmente esclavos y nadie piense con su propia cabeza. Del mismo modo que no es una realidad aceptable la de una minoría de afortunados, ya sean naciones o ciudadanos, en el pleno goce de sus derechos, rodeados de una mayoría desposeída y marginada, como ocurre en África y varios países de América.

Pese a estas decepciones el liberalismo no baja los brazos en su defensa de la libertad humana. Los aportes del denominado liberalismo igualitarista de John Rawls o, con algunas diferencias, las contribuciones aporte de Jurgen Habermas sobre el estado social de derecho y el patriotismo constitucional, constituyen los logros teóricos más importantes de la actual filosofía política en su conjunto. Un conjunto variado y rico de reflexiones, que pese a desarrollarse sin evadirse de la lógica del capitalismo, un modo de producción que por el momento carece de alternativas viables, rechaza las monstruosas desigualdades que éste, dejado a su suerte, genera de modo incremental.

Por ello resulta imprescindible hallar en el campo económico, pese a lo complejo del desafío, las fórmulas adecuadas para conseguir el crecimiento, sin desmedro de la profundización de la equidad, las que en lo previsible, pasarán por una adecuada, pero novedosa combinación de mercado y estado y un diferente rol de la sociedad civil, una dimensión donde mucho puede hacerse todavía. Además de un imprescindible nuevo orden internacional que supere el egoísmo de los poderosos en aras de un mundo más justo donde a nadie se le nieguen sus derechos. Por ahora poco más que un deseo.-

